

RESUMEN EJECUTIVO

Ecuador es una república constitucional, con sistema multipartidista con un presidente elegido y una legislatura unicameral. En el 2013, los ciudadanos reeligieron al Presidente Rafael Correa y escogieron a los miembros de la Asamblea Nacional en un proceso electoral que en general fue libre y limpio. El 3 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó 16 enmiendas a la Constitución, incluyendo una que eliminaría los límites de mandato para la presidencia y otros funcionarios elegidos, a partir de las elecciones generales del 2017. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad.

Los principales abusos contra los derechos humanos fueron la falta de independencia del sector judicial; las restricciones a la libertad de expresión, de prensa, de asamblea y de asociación; y la corrupción. Las instancias reguladoras del gobierno establecidas bajo la Ley de Comunicación del 2013 impusieron una serie de sanciones y multas principalmente a medios y periodistas independientes y exigieron correcciones y rectificaciones obligatorias. El Presidente Correa y su administración continuaron con ataques verbales y legales contra los medios y la sociedad civil. Decretos presidenciales proporcionaron discrecionalidad al gobierno para disolver organizaciones de la sociedad civil con fundamentos generales y ambiguos. La limitación a la libertad de asociación continuó, afectando particularmente a los activistas ambientales y a los grupos indígenas que protestan por leyes que afectan sus tierras.

Otros problemas de derechos humanos continuaron: fuerza excesiva y muertes arbitrarias aisladas por parte de las fuerzas de seguridad; detención y arresto arbitrario; y demora y denegación del debido proceso. Continuaron la violencia y la discriminación contra la mujer, los niños, los grupos minoritarios y la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (GLBTI); la trata de personas y el trabajo infantil.

El gobierno algunas veces dio pasos para enjuiciar o castigar a oficiales de los servicios de seguridad y de otras ramas del gobierno que cometieron abusos, a pesar de que en algunos casos de interés público, la interferencia política a menudo resultó en impunidad.

Informe completo